

Banfield Defiende los PLA de SUNY

Una de las principales prioridades de la agenda legislativa de Nueva York para los carpinteros sindicales fue aprobar directrices para el uso de acuerdos laborales de proyectos (PLA) en proyectos de construcción emprendidos por el sistema estatal de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY).

Aunque la escuela ha tenido una buena relación con los sindicatos en algunos campus, ha habido algunas preocupaciones sobre los peligros de que contratistas de mala calidad (y tácticas de licitación bajas) se introduzcan en los campus.

Para defender públicamente las legislaciones, Bill Banfield, secretario ejecutivo adjunto y tesorero del Consejo Regional de los Estados del Atlántico Norte, fue autor del siguiente artículo de opinión, que fue publicado por PoliticsNY, una fuente influyente de noticias políticas y legislativas del estado de Nueva York.

El proyecto de ley avanzó positivamente en ambas ramas de la legislatura y estaba a la espera de la decisión final del Gobernador.

Mientras las negociaciones presupuestarias anuales se intensifican en Albany, los trabajadores manuales están pidiendo a los formuladores de políticas que aprueben leyes que restablezcan la rendición de cuentas y traigan normas laborales efectivas al proceso de desarrollo de las universidades públicas. Esta idea se basa en un principio simple: cuando los fondos de los contribuyentes de Nueva York se utilizan en un proyecto, esa inversión debe regresar a las comunidades de Nueva York.

Tanto el Senado como la Asamblea han incluido lenguaje en sus propuestas presupuestarias que requerirían acuerdos laborales de proyecto (PLA) para proyectos de construcción de SUNY a gran escala. Un PLA es un acuerdo que define los salarios y las reglas laborales para un proyecto, y es aprobado por los trabajadores y el organismo público adjudicador antes de que comience el proyecto. El propósito de un PLA es garantizar que todos los trabajos de construcción se realicen de manera eficiente y económica sin interrupción.

La principal razón de ser de los PLA en la industria de la construcción es la estabilidad. Al definir de forma clara y transparente un marco al inicio de un proyecto, los PLA evitan paros laborales y establecen procedimientos de resolución de disputas.

Los proyectos de construcción privados han utilizado PLA durante décadas. El parque temático Legoland de Goshen, valorado en \$265 millones de dólares, fue construido con mano de obra sindical en el marco de un PLA, al igual que la renovación de \$200 millones de dólares de la sede de Morgan Stanley en Harrison. Estos son sólo dos ejemplos recientes de grandes proyectos exitosos que llegaron a tiempo y dentro del presupuesto, gracias a un acuerdo laboral del proyecto.

En proyectos financiados con fondos públicos, los PLA protegen a los contribuyentes de la misma manera. Garantizan que un proyecto se desarrolle dentro del presupuesto y el cronograma, por y para los neoyorquinos. Los PLA a menudo incluyen disposiciones de contratación local que garantizan que los residentes locales tengan oportunidades laborales e inviertan dinero en la

economía local. Se pueden utilizar para promover la diversidad en la fuerza laboral y ampliar las oportunidades a más neoyorquinos.

Los PLA también alientan a los contratistas de mayor calidad a presentar ofertas en proyectos. Sin costos ocultos, los contratistas pueden presentar ofertas específicas sin preocuparse de ser socavados por contratistas menos escrupulosos que toman atajos. Los PLA se utilizan para mantener lugares de trabajo seguros al exigir que los trabajadores tengan capacitación en seguridad y cumplan con los estándares avanzados de OSHA. Esto reduce los costos asociados con las lesiones en el lugar de trabajo.

Los PLA garantizan que cuando el dinero de nuestros impuestos se invierte en un proyecto grande, esa inversión impulse el crecimiento económico para la economía del estado y para los verdaderos neoyorquinos. Al garantizar que los contratistas cumplan con las normas laborales básicas, este enfoque de sentido común protege a los trabajadores de la construcción, a los contribuyentes y a la industria de la construcción. Con la Legislatura a bordo, el siguiente paso le corresponde al Gobernador.